

La concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe
Mauricio Roitman y Gustavo Ferro
Texto de Discusión N° 43
ISBN 987-519-107-8
(Marzo 2003)

CEER

Centro de Estudios Económicos de la Regulación
Universidad Argentina de la Empresa
Lima 717, 1° piso
C1073AAO Buenos Aires, Argentina
Teléfono: 54-11-43797693
Fax: 54-11-43797588
E-mail: ceer@uade.edu.ar
<http://www.uade.edu.ar/economia/ceer>

(Por favor, mire las últimas páginas de este documento por una lista de los Textos de Discusión y de la Working Paper Series del CEER e información concerniente a suscripciones).

El Centro de Estudios de Economía de la Regulación (CEER), es una organización dedicada al análisis de la regulación de los servicios públicos. El CEER es apoyado financieramente por el Banco Mundial, los Entes Reguladores de Agua y Electricidad de la República Argentina, y la Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires), donde el CEER tiene su sede.

Autoridades del CEER:

Ing. Eduardo Cevallo, Presidente Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios. Lic. Enrique Devoto, Vicepresidente Primero Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Dr. Antonio Estache, World Bank Institute, Dr. Carlos Newland, Rector Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Dr. Omar Chisari, Decano Facultad de Ciencias Económicas (UADE).

Director: Dr. Diego Petrecolla

INVESTIGADORES: Lic. Diego Bondorevsky, Dr. Omar Chisari, Dr. Gustavo Ferro, Dr. Diego Petrecolla, Dr. Martín Rodríguez Pardina, Lic. Carlos Romero, Lic. Christian Ruzzier, Lic. Iván Canay.

Ayudantes de Investigación: Lic. Mauricio Roitman, Lic. Solange Cohen.

CEER Serie de Textos de Discusión
La Concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe
Mauricio Roitman y Gustavo Ferro
Texto de Discusión N° 43
(Marzo 200)
JEL N°: L5, L9

Resumen:

El presente trabajo reseña la Concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe (Ex-DIPOS), centrándose en el análisis de la privatización y regulación económica del servicio público. Para ello se analiza el proceso desde el momento de la Concesión del servicio a Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., el Contrato de Concesión y la Ley Provincial N°11220 que tienen incidencia en materia de regulación económica.

También se presenta información sobre los problemas de diseño tarifario e inversiones (expansión del servicio) y de la renegociación que comenzó en abril de 1999, la cual no se ha cerrado hasta el día de hoy (febrero 2002), profundizándose las diferencias entre las partes debido a los cambios en el contexto macroeconómico que sufrió la República Argentina a partir de diciembre de 2000. Con respecto a este punto se señalan los procedimientos establecidos en el proceso de la privatización para enfrentar esta eventualidad contractual.

Pertenencia profesional del autor:

Gustavo Ferro, Investigador CEER/UADE, Profesor Investigador UADE, gferro@uade.edu.ar
CEER

Centro de Estudios Económicos de la Regulación

Departamento de Economía y Finanzas, Universidad Argentina de la Empresa

Lima 717, 1° piso

C1073AAO Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 54-11-43797693

Fax: 54-11-43797588

E-mail: ceer@uade.edu.ar

<http://www.uade.edu.ar/economia/ceer>

La concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe

I-Introducción

El objetivo del presente trabajo es reseñar la Concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe (Ex-DIPOS), centrándose en el análisis de la privatización y regulación económica del servicio.

Haciendo comparaciones entre los distintos servicios de agua potable a nivel provincial, se pueden observar los siguientes puntos relevantes en cuanto a la posición relativa del servicio en la provincia de Santa Fe:

- 1) La cobertura a nivel provincial en Santa Fe es del 84,81% de la población provincial, cifra cercana al promedio nacional. Hay que destacar en este punto que esta no es una medida de la población cubierta por Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. ya que varias poblaciones pequeñas y medianas del interior provincial no están comprendidas en el ámbito de la Concesión.
- 2) La participación del sector privado es del 93%, cifra por encima del promedio nacional (45%).
- 3) La producción de agua promedio es de 327 l/d/h, menor al promedio nacional (372 l/d/h).
- 4) La micromedición instalada es 22,8%, menor al promedio nacional (24,9%).
- 5) La continuidad del servicio no presenta inconvenientes ya que es de 100%, siendo el promedio nacional menor, del 96.37%.
- 6) El porcentaje de cobertura de cloacas de la población provincial es del 43.69%, mientras que el promedio nacional es de 53.16%. (Es igualmente válida la aclaración sobre el presente ítem señalada anteriormente en el servicio de agua potable).
- 7) La participación del sector privado en la prestación del servicio de cloacas es del 81%, mientras que el promedio nacional es del 39%.
- 8) El porcentaje de tratamiento primario de los residuos cloacales de la provincia de Santa Fe, 9.8%, es mucho menor al promedio nacional, 62.5%. Se aprovecha el poder de dilución del caudaloso Río Paraná, a cuya vera se han edificado la capital y la ciudad más poblada, Rosario.
- 9) El Ente Regulador de la Provincia se denomina ENRESS.

Luego de esta introducción, en la parte II, se describen los aspectos fundamentales del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), comprendiendo antecedentes históricos, marco legal y de regulación económica y de calidad del servicio. En la Parte III se describen las normas contractuales y regulatorias más importantes del PByC y del Contrato de Concesión. La Parte IV está dedicada al régimen tarifario de la concesión¹ y los aspectos más relevantes para los objetivos enunciados antes. El punto V se refiere al acuerdo de renegociación contractual entre Aguas de Santa Fe S.A. y la Provincia de Santa Fe. En la parte VI, se pasa revista a los últimos acontecimientos (renegociación iniciada y el impacto del shock macroeconómico que significó la devaluación de enero de 2002 y las normas conexas). En la Parte VII, se efectúan reflexiones finales.

¹ Los valores citados en el presente trabajo corresponden a pesos con una paridad US\$1=\$1 (pre-devaluación de enero de 2002).

Cuadro 1: Datos socioeconómicos y del sector de Agua y Saneamiento por jurisdicción.

PROVINCIA	POBLACION MILES 2001	POBLACION MILES 1991	PBI PER CAPITA 1996	ESPERANZA DE VIDA	MORTALIDAD INFANTIL	NBI 1991	COBERTURA AGUA	COBERTURA CLOACAS	PRODUCCION PER CAPITA AGUA	MICRO- MEDICION INSTALADA
CAPITAL FEDERAL	2768	2965	18605	72,72	13,1	5,60	100	99	617	10
BUENOS AIRES	13818	12594	6576	72,09	22,2	12,90	74,42	49,64	865	25,2
CATAMARCA	333	265	5030	70,61	26,1	23,20	95,5	39,77	302	32,8
CORDOBA	3061	2764	6809	72,79	20,5	10,50	84,24	38,72	296	28
CORRIENTES	929	795	4395	70,09	27,3	24,20	89,2	58,99	284	90,8
CHACO	983	838	3239	69,02	32,8	30,70	81,62	33,72	256	32,4
CHUBUT	413	356	11354	70,58	20,3	18,10	99,18	71,61	203	10,8
ENTRE RIOS	1156	1022	5028	71,61	20,5	13,90	93,58	58,94	371	12,3
FORMOSA	485	404	2995	69,37	30,5	31,80	75,77	38,92	266	7,8
JUJUY	611	513	5385	68,37	26,4	31,80	96,98	71,67	341	62,7
LA PAMPA	298	260	11522	71,51	17,4	9,40	82,02	52,07	155	85,3
LA RIOJA	289	220	3492	70,38	22,1	22,50	88,36	43,97	648	9,1
MENDOZA	1576	1414	7878	72,72	18,4	13,50	95,91	59,22	536	12,4
MISIONES	963	789	3395	69,49	23,2	28,10	65,75	19,43	192	81,4
NEUQUEN	473	388	11796	71,39	14,1	18,50	98,44	63,09	519	28
RIO NEGRO	552	506	8378	70,87	20,8	18,70	96,43	64,49	335	53
SALTA	1079	866	5828	68,92	26,8	32,60	91,17	73,32	471	0,9
SAN JUAN	622	529	4571	71,13	25,2	15,60	92,84	31,95	628	5,7
SAN LUIS	366	286	7117	70,79	23,1	17,40	95,13	50,48	365	23
SANTA CRUZ	197	159	11792	70,41	21,9	14,30	98,52	78,54	288	0,4
SANTA FE	2997	2797	8582	72,29	17,6	11,50	84,81	43,69	327	22,8
SGO.DEL EST.	806	672	3309	69,83	23,3	30,70	88,76	37,59	227	4,3
T.DEL FUEGO	100	69	11792	70,16	11,1	25,30	100	92,48	468	1,7
TUCUMAN	1336	1142	6191	71,01	28,9	22,00	88,82	50,51	532	0,8
TOTAL	36223	32613	7679	71,67	22,2	14,50	83,82	53,59	572	24,9

Fuente: INDEC y SPIDES-ENOHA.

II-Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe

El 2 de enero de 1995 el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda (MOSPyVSF), llamó a licitación pública internacional para el otorgamiento en concesión de la prestación del suministro de agua potable y desagües cloacales, en las condiciones que prevé la Ley N° 11220 y el PByC de la licitación. La autoridad de aplicación fue el MOSPyVSF. El concedente es el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe.

El ámbito de la Concesión es el territorio comprendido bajo la jurisdicción de las municipalidades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, así como las municipalidades y comunas que en el futuro se incorporen. Fuera de las jurisdicciones mencionadas, la Concesión también comprende el derecho a construir y operar todo tipo de obras necesarias para el servicio dentro de dicho ámbito. El Concesionario también puede comercializar agua en bloque, previa autorización del Ente Regulador.

El objeto de la concesión es: “realizar la captación, tratamiento, acopio, transporte, distribución y comercialización de agua potable; la captación, acopio, transporte y comercialización de agua cruda, para su posterior tratamiento; la colección, tratamiento, disposición y comercialización de efluentes cloacales y pluvio-cloacales, con inclusión de los barros y otros subproductos del tratamiento, y de efluentes industriales cuyo vertimiento al sistema cloacal sea legal o reglamentariamente admisible”.

En todos los casos el servicio incluye el mantenimiento, la construcción, rehabilitación y expansión de las obras necesarias para su prestación. No se incluye dentro del objeto de la Concesión la prestación y el cobro del servicio de desagües pluviales, salvo los casos de desagües pluvio-cloacales combinados en la ciudad de Rosario. El Concesionario puede realizar otras actividades vinculadas con el servicio, no incluidas en el objeto de la Concesión (tales como industrialización y comercialización de barros y subproductos de tratamiento, la prestación de servicios técnicos sanitarios y de laboratorio a terceros), con autorización previa del Ente Regulador.

El plazo de la Concesión es de 30 años. El otorgamiento de la Concesión no comprende el pago de canon por parte del Concesionario. El Pliego y el Contrato de Concesión establecen que la Concesión comprende la obligación del Concesionario de llevar a cabo las inversiones necesarias para ejecutar el Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio (PGMDS) y asegurar la correcta prestación del servicio.

La prestación del servicio es realizada con carácter de exclusividad por el Concesionario, con las limitaciones establecidas respecto de fuentes alternativas de agua y resguardando los derechos de los usuarios potenciales. Las actividades referidas a la captación, transporte, tratamiento, disposición y comercialización de efluentes industriales no asimilables a desagües cloacales, fueron sujetas a un régimen de libre competencia.

El Concesionario, el servicio y todo otro aspecto derivado de la ejecución del Contrato de Concesión, está bajo el control y regulación del Ente Regulador.

Las normas aplicables a la Concesión son las siguientes:

- 1) Ley provincial N°11220;
- 2) El Pliego, sus anexos, las resoluciones y circulares aclaratorias o modificatorias;
- 3) La Oferta;
- 4) El Contrato de Concesión;
- 5) Las normas que dicte el Ente Regulador y otras normas reglamentarias que se establezcan en el futuro.

La licitación se realizó mediante el sistema de triple sobre. Los adquirentes del pliego tuvieron acceso a la información disponible sobre la situación de DIPOS (Dirección Provincial de Obras Sanitarias. No obstante, se estipuló que “El oferente será plenamente responsable de la suficiencia de su oferta y hará todas las investigaciones que considere necesarias para asegurarse que la misma sea completa... no serán admitidos, ni durante la licitación ni durante la vigencia del contrato de concesión, reclamos fundados en defectos o insuficiencia de la información provista, en la falta de respuesta en término o en la demora en brindarla...”.

Los Consorcios que se hicieron presentes en la licitación fueron:

- 1) Consorcio Saur International, Società Italiana per Ilgas P.A. (Italgas), Sideco Americana S.A., y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.;
- 2) Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. que está integrado por las siguientes empresas: Lyonnaise des Eaux, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Sociedad Comercial del Plata S.A.;
- 3) North West Water International Limited, Santa Fe Water Enterprises Ltd, Inversora Catalina S.A..

Según consta en el Pliego, los oferentes debieron cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Al menos uno de los integrantes de cada oferente debió acreditar experiencia suficiente en la operación, mantenimiento y gestión de servicios de provisión de agua potable, desagües cloacales y operación de plantas de tratamiento de agua potable y desagües cloacales.
- 2) Los oferentes debieron contar con un patrimonio neto superior a U\$S 400 millones.
- 3) Los oferentes o sus integrantes debieron contar con fuentes de financiamiento de entidades financieras o crediticias por un monto mínimo disponible de U\$S 100, a ser desembolsados durante los primeros cinco años de la Concesión. No podían considerarse a tal fin, los financiamientos del BID ni del BIRF otorgados a DIPOS, aunque su pago hubiera sido asumido por el Concesionario, según lo establecido en el Contrato de Concesión.
- 4) Los Oferentes debieron incluir entre sus miembros una o más empresas que cumplieran con los requisitos técnicos indicados anteriormente. Los que hubieren sido tomados en cuenta para la calificación fueron considerados “Operador”, siéndoles de aplicación solidaria todas las obligaciones que el pliego impuso a los operadores.

La situación jurídico-económica de control tenida en cuenta para la calificación del Operador (controlados, controlantes o sujetos a control común), no podrá modificarse durante toda la vigencia de la Concesión, salvo autorización previa del Concedente. La violación de dicha disposición es causal de rescisión por culpa del Concesionario, y genera la ejecución de la garantía de operación.

Los Consorcios presentes en la Licitación debieron hacer una oferta de precalificación, una técnica, y por último, la oferta económico-financiera que contenía el precio del metro cúbico de agua potable, proyecciones económico-financieras y la estructura de costos para el primer año de la concesión. El precio del metro cúbico de agua potable, definido como “Pq”, debía ser único para todo el período de la concesión, sin perjuicio de las modificaciones expuestas en el pliego. Debía estar explícitamente indicado en pesos por metro cúbico, no admitiéndose fórmulas o expresiones matemáticas y/o financieras para su determinación, y expresado con cuatro cifras decimales. Dicho valor de Pq era el elemento de elección (menor valor) para adjudicar la concesión.

El pliego estableció que el concesionario debía tomar a todo el personal incluido en el anexo del PByC..

Para garantizar las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión, era obligación del adjudicatario, antes de su firma, presentar una garantía constituida a favor de la provincia de Santa Fe por un monto de U\$S 50 millones, mantenidos durante toda la vigencia del Contrato de Concesión. Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Operador, el Adjudicatario debió presentar antes de la firma del Contrato de Concesión, una garantía constituida a favor de la provincia de Santa Fe por un monto equivalente a U\$S 10 millones, que debían ser mantenidos durante toda la vigencia del Contrato de Concesión.

III-Normas Contractuales y Regulatorias

El objeto social del concesionario deberá ser exclusivamente, el cumplimiento del Contrato, durante toda su vigencia.

La participación accionaria mínima del Operador, establecida en el Anexo V del Pliego, es nominativa e intransferible durante los 10 primeros años de la concesión, incluso respecto de las sociedades que conformen al operador, entre sí. Luego de dicho plazo, el operador podrá reducir su participación en el Concesionario siempre que mantenga el 80% de la participación mínima exigida.

El Concesionario es responsable de la construcción, mantenimiento, operación, rehabilitación y explotación de todas las instalaciones necesarias para la prestación del servicio. Dicha responsabilidad incluirá también las conexiones domiciliarias. El Concesionario debe extender, mantener, renovar y rehabilitar las redes externas de agua potable y desagües cloacales, conectarlas y prestar el servicio en las condiciones establecidas, a aquellos inmuebles situados en las áreas expresamente delimitadas en los planos incluidos en la oferta e integrantes de PGMDS. Son de cumplimiento obligatorio los compromisos mínimos exigidos en el Pliego y los efectuados por el adjudicatario en su oferta.

El Concesionario es responsable de la prevención de los riesgos de contaminación que provengan de la provisión del servicio que preste, con el alcance que surge del contrato. Al efecto, entre otras facultades podrá cegar toda fuente alternativa de agua potable o desagües alternativos con que cuenten los usuarios, una vez que las conexiones correspondientes estén habilitadas y el servicio se preste efectivamente. Lo respectivo a la conexión entre las instalaciones internas y las redes externas está bajo la responsabilidad del Concesionario y debe ser ejecutada por éste, o bajo su responsabilidad.

El Concesionario tiene la obligación de prestar el servicio de agua potable y desagües cloacales en aquellos asentamientos poblacionales ediliciamente precarios que fueran así declarados mediante resolución fundada del Ente Regulador. En resolución, el Ente Regulador debe precisar el alcance del servicio a prestar, el organismo provincial responsable del pago al concesionario y, en caso que se trate de un asentamiento no servido, el plazo para iniciar la prestación. Asimismo y en caso de asentamientos ediliciamente precarios que ya contaren con alguna prestación al momento de la toma de posesión, la misma deberá ser continuada por el concesionario y convalidada a través del dictado de la resolución respectiva por parte del Ente Regulador.

Los servicios de agua en bloque sólo podrán ser prestados por el Concesionario en tanto exista capacidad excedente en los sistemas por él operados y no se afecte la calidad del servicio requerida para la prestación general. Sumados a los items mencionados antes, el Concesionario tiene la obligación de proveer agua para limpieza y riego público, agua a vehículos aguadores y agua para construcción, teniendo derecho a su respectivo cobro.

El agua que el Concesionario provea debe cumplir con las normas de calidad establecidas en el Anexo A de la Ley N°11.220, que se reproduce en el Anexo 2 del Contrato de Concesión, y en las resoluciones que dicte el Ente Regulador. El Concesionario debe asegurar la potabilidad del agua tratada en los puntos de abastecimiento a los usuarios. La política de fluoruración del agua es la establecida por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El Concesionario debe, como parte integrante del PGMDS que implemente, renovar y/o rehabilitar las redes de distribución de agua potable y desagües cloacales que no permitan la eficiente prestación del servicio.

En lo que respecta a la presión del agua, el suministro de agua potable debe realizarse manteniendo una presión mínima disponible de 7 metros de columna de agua, medida en la llave maestra de conexión de los inmuebles servidos, desde el nivel del piso, en el punto de toma de presión. Este requerimiento de presión establecido puede ser rebajado por el Ente Regulador en áreas determinadas. Es considerado incumplimiento a la obligación de continuidad del servicio el registro de presiones inferiores a un 1 metro columna de agua medido en la llave maestra.

Según especificaciones, el Ente debe establecer un programa de muestreo y evaluación de efluentes vertidos. El Concesionario es responsable de la disposición de los barros y subproductos resultantes de los procesos de tratamiento, debiendo minimizar el impacto ambiental de la alternativa seleccionada.

En lo respectivo a la atención de los usuarios, el Concesionario debe cumplir en todo momento con las disposiciones del Reglamento del usuario aprobado. Debe brindar a los usuarios como mínimo los servicios comprometidos en la Oferta, en los plazos establecidos, y proporcionar a los usuarios un servicio permanente de emergencia en cada localidad abastecida.

Los cortes en el servicio se clasifican, por su gravedad o su alcance en: corte de primer orden, corte de segundo orden, corte de tercer orden, corte de cuarto orden, corte programado y corte imprevisto.

En aquellos casos en que no se prevea una regla de procedimiento o mecanismo aplicable a una situación en particular, éstas serán establecidas por el Ente Regulador contemplando los principios establecidos en la Ley N°11.220 y en el Contrato.

El Ente Regulador debe cooperar con el Concesionario de forma tal de facilitar el cumplimiento del Contrato, ejerciendo el poder de policía, de regulación y control, de manera tal de no entorpecer la gestión del Concesionario. La regulación y el control de la Concesión serán efectuados por el Ente Regulador a través de la información que obtenga sobre el servicio. El Concesionario debe llevar al efecto registros suficientes y emitir los informes que se le solicitan expresamente en las normas contractuales. Asimismo debe presentar al Ente Regulador los informes adicionales que éste le requiera en el marco de su competencia y en los plazos que éste prevea en cada caso.

El Concesionario debió nombrar y contratar libremente a su cargo un auditor técnico y un auditor contable. Los auditores son considerados parte integrante del sistema de regulación de la Concesión.

El Concesionario debe realizar informes y estudios especiales, y presentarlos al Ente Regulador para su aprobación en la oportunidad y formas que se establecen para cada uno de ellos: inventario de bienes y evaluación de su estado, funcionamiento y rendimiento; estudio del servicio; plan de prevención y emergencias; presupuesto anual.

El PGMDS comprende los planes de acción y las obras necesarias para alcanzar las metas y compromisos cuantitativos, cualitativos y de eficiencia del servicio, así como las obligaciones de cobertura geográfica que el Concesionario debe ejecutar de acuerdo a los términos del pliego, su Oferta y el Contrato. Comprende asimismo las actualizaciones, precisiones y modificaciones incorporadas por vía del Informe Anual, una vez que las mismas sean aprobadas por el Ente Regulador. La declaración de Metas de Servicio efectuada en la Oferta se considerará parte

integrante del PGMDS. Los contenidos del PGMDS y del Informe Anual de Avance del PGMDS, deben ser adecuadamente publicados por el Concesionario.

Los valores tarifarios y precios vigentes desde la fecha de toma de posesión surgen por aplicación de las disposiciones del régimen tarifario. Los valores y precios contemplados en el régimen tarifario tienen vigencia durante todo el período de la Concesión, a partir de la toma de posesión.

Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento sólo pueden ser modificados por resolución del MOSPyVSF, previo dictamen del Ente Regulador. La propuesta de revisión puede ser efectuada por el Concesionario o por el Ente. Toda modificación debe estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales previos, y en la prueba de los hechos, actos y sus consecuencias que den lugar a la variación. Las modificaciones no pueden ser un medio de penalizar al Concesionario por beneficios logrados en la operación del servicio, ni por incrementos de eficiencia respecto de lo previsto en la Oferta dentro del PGMDS, ni tampoco deben ser usadas para compensar déficit incurridos derivados del riesgo empresarial o de cualquier otra causa, ni convalidar ineficiencias en la prestación del servicio.

La Concesión está basada en el principio del riesgo empresarial. Por lo tanto, sólo pueden ser invocadas modificaciones en las condiciones del mercado de bienes y/o servicios comprometidos en la concesión, en tanto fueren originadas en decisiones expresas de la autoridad pública.

Como presupuesto indispensable para su consideración, toda propuesta de modificación del Concesionario, como así también toda presentación o respuesta a solicitudes de información que pudiese requerir el Ente Regulador en la materia, debe ser acompañada de la correspondiente certificación de los auditores técnico y contable.

Se deben considerar en todo momento los principios establecidos en el artículo 81 de la Ley N°11.220. La incorporación al servicio de las municipalidades y comunas situadas fuera del ámbito de la Concesión, no generará modificaciones a los valores tarifarios y precios del servicio prestado a las restantes jurisdicciones de la Concesión.

Se consideran revisiones por modificación del PGMDS a las que el Ente Regulador disponga como consecuencia de haber introducido cambios sustanciales en las metas contenidas en el PGMDS. En ningún caso se admitirán modificaciones en el PGMDS causadas por incumplimiento del Concesionario.

Las revisiones se basarán en: el estudio y análisis fundado de los valores tarifarios y precios vigentes, y su relación con la modificación dispuesta y, el impacto de dichas modificaciones sobre los costos de la Concesión y el análisis de la necesidad de modificar los valores tarifarios y precios vigentes.

Se define revisión de los valores tarifarios y precios vigentes por modificación de costos, como la que corresponda realizar en caso que el Concesionario o el Ente Regulador hubieren invocado un incremento o disminución en los costos de la Concesión superior al cuatro por ciento. A fin de determinar la pertinencia de efectuar una revisión por modificación de costos, el Concesionario debe incluir en cada informe que presente:

- 1) Elementos relevantes y constitutivos de la estructura de costos.
- 2) Incidencia porcentual de cada uno de los elementos relevantes y constitutivos de la estructura de costos.

3) Índices oficiales, uno por cada rubro, seleccionados expresamente de entre los publicados por el INDEC que proponga para reflejar la variación de costo correspondiente a cada uno de los elementos nombrados en los dos incisos anteriores.

4) En el caso del tipo de cambio, se considerará la variación del dólar estadounidense, tomando como base la paridad U\$S 1 = \$1 establecida por la Ley de Convertibilidad N°23.928.

La habilitación del procedimiento analítico de la revisión no implica para el Ente Regulador la obligación de aprobar modificaciones a los valores tarifarios y precios vigentes, así como que la participación del Concesionario es únicamente a título informativo. El Ente Regulador analizará la procedencia de la revisión sobre la base de:

1) Estudio y análisis fundado de los valores tarifarios y precios vigentes y su relación con la modificación solicitada.

2) Estudio y análisis fundado de los precios y cantidades incluidos en cada presupuesto anual que el Concesionario presente y su ejecución al momento de la presentación de la solicitud de revisión.

3) Análisis de las proyecciones de costos excluyendo amortizaciones contables y previsiones, contempladas en la Oferta y en el PGMDS, considerando las incidencias previstas sobre la estructura de costos.

4) Consideración del servicio de la deuda cuya asunción debe realizar el Concesionario como consecuencia de la prestación del servicio.

5) Impacto de las variaciones de costos identificadas sobre la totalidad de la estructura de costos de la Concesión.

Como resultado del análisis realizado, el Ente Regulador determinará la procedencia y correspondiente modificación de los valores tarifarios y precios vigentes. Estas, sólo podrán compensar costos emergentes de la prestación del servicio con la calidad exigida, ajustada a las metas comprometidas para cada período.

El Ente Regulador, por sí o a pedido del Concesionario, deberá requerir al MOSPyVSF la autorización de una revisión extraordinaria de valores tarifarios y precios vigentes, en los siguientes casos:

1) Modificación de las normas de calidad de agua y/o desagües cloacales que signifiquen un cambio sustancial en las condiciones de prestación del servicio, y que impliquen un perjuicio inmediato a la Concesión.

2) Modificación de la relación de convertibilidad con relación el dólar estadounidense fijada por Ley Nacional N° 23.928.

3) Creación, sustitución o modificación de los tributos o sus alícuotas, con excepción de los impuestos a las ganancias y al valor agregado o de los que en el futuro los reemplacen.

4) La sanción o dictado de normas en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, o la modificación de las disposiciones análogas vigentes, que afecten directamente la prestación del servicio, y que impliquen un perjuicio inmediato a la Concesión.

El Régimen Tarifario aplicable para la Concesión puede ser modificado sólo a partir del cumplimiento del tercer año desde la toma de posesión. Sin embargo, en caso de no haberse dado cumplimiento a la totalidad de las metas comprometidas para ese período en el PGMDS, dicho régimen no puede ser modificado hasta tanto el Ente Regulador determine la cesación del incumplimiento.

Toda modificación al régimen tarifario será dispuesta por el MOSPyVSF a propuesta fundada del Ente Regulador. El Régimen Tarifario aplicable sólo puede ser modificado en cualquiera de los siguientes casos:

- 1) Si el Concesionario demuestra que no ha podido equilibrar la oferta y demanda del servicio por razones imputables al Régimen Tarifario vigente, pese a haber realizado todas las acciones tendientes a ello y haber actuado eficientemente.
- 2) Si el Concesionario demuestra que el Régimen Tarifario vigente no propende a un uso racional de los bienes y recursos empleados para la prestación del servicio, o que no permite atender los objetivos sanitarios vinculados directamente con la prestación.
- 3) Si el Concesionario demuestra que en virtud de la modificación del Régimen Tarifario obtendrá una significativa reducción en los costos operativos, con los consiguientes beneficios para los usuarios.

En los casos de modificaciones en el Régimen Tarifario destinadas a atender objetivos sociales, el Concedente deberá compensar al Concesionario cuando disminuya el total facturado como consecuencia de dicha modificación.

En caso de que alguna municipalidad o comuna impida la ejecución del PGMDS, el Concesionario debe hacerlo saber al Ente Regulador, a fin de que éste realice las gestiones necesarias para solucionar el impedimento. Si aún así no fuera posible ejecutar el PGMDS, el Concesionario queda liberado del cumplimiento de las obligaciones. En ningún caso esta circunstancia da derecho al Concesionario a reclamos de indemnización o subsidios. El Ente Regulador puede convenir con el Concesionario adecuaciones en el PGMDS destinadas a mantener las inversiones originalmente previstas.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Concesionario es pasible de ser sancionado con apercibimiento, multas e intervención cautelar. La aplicación de dichas sanciones están a cargo del Ente Regulador. La aplicación de la sanción no eximirá al Concesionario de sus obligaciones.

Las sanciones se gradúan en atención a la gravedad y reiteración de la infracción, las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al servicio prestado, a los usuarios y a terceros, el grado de afectación al interés público, el grado de negligencia, culpa o dolo incurrido, la diligencia puesta de manifiesto para subsanar los efectos del acto u omisión imputados y la cesación en la infracción incurrida al momento de ser presentado el descargo por el Concesionario, en cuyo caso el Ente Regulador puede evaluar esta circunstancia para reducir la sanción que pudiere haber correspondido. Los atrasos en el cumplimiento del PGMDS también son sancionados.

IV-Régimen Tarifario de la Concesión (Anexo 9-Normas Contractuales-PByC Aguas provinciales de Santa Fe)

El Ente Regulador es el encargado de dictar toda reglamentación en materia tarifaria que considere necesaria a los efectos de la aplicación del régimen tarifario. Debe resolver, fundamentalmente, aquellos casos que, por sus características singulares, requiriesen un tratamiento especial o bien no hubiesen sido previstos en el régimen tarifario.

El Concesionario tiene derecho a la facturación y cobro de todos los servicios que preste, según el alcance establecido en la Ley N° 11.220 y el Contrato de Concesión.

Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento se consideran como valores máximos regulados. El Concesionario puede establecer valores tarifarios y precios menores, en todos los casos con carácter general para situaciones análogas. Los descuentos que pudiere otorgar el Concesionario no deben generar, directa o indirectamente, variación alguna para los restantes usuarios.

El Concesionario debe asumir las exenciones, rebajas y subsidios indicados en el régimen tarifario (como prestación a los asentamientos ediliciamente precarios). Respecto de toda otra exención, la autoridad pública debe compensar toda suma dejada de percibir por este concepto.

El Concesionario está facultado para proceder al corte del servicio por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que correspondieren, respetando las disposiciones al efecto. Las facturas, liquidaciones o certificados de deuda que emita el Concesionario por los servicios que hubiere prestado, tienen fuerza ejecutiva.

Toda situación de clandestinidad y/o incumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios, y que genere la necesidad de refacturar períodos, determina la aplicación de un recargo del 20% por sobre los valores que hubiere correspondido facturar si dicha situación no hubiere existido.

El Concesionario tiene derecho a facturar los servicios que preste a los inmuebles en propiedad horizontal, con cargo a los consorcios de propietarios constituidos de acuerdo a la Ley Nacional N° 13512, respetando las disposiciones del Régimen Tarifario. Asimismo, el consorcio de propietarios como persona jurídica, es responsable del pago del importe total de la factura del inmueble, quedando excluidas las unidades funcionales que sean provistas de conexión independiente que asumen la responsabilidad del pago de los servicios facturados.

En aquellos inmuebles sometidos al régimen de la Ley Nacional N° 13512 y sujetos a la micromedición, el consorcio de propietarios puede solicitar a su cargo la micromedición de volúmenes a determinadas unidades funcionales, siempre y cuando ello fuese técnicamente posible. En los casos que los medidores individuales estuvieren reglamentariamente instalados en una batería común de medición directamente accesible desde la vía pública, no procederá la facturación al consorcio de propietarios.

En todo inmueble en el que no existiere sistema de micromedición de volúmenes instalado, el usuario correspondiente puede requerir al Concesionario la instalación del mismo abonando el cargo que correspondiere. La instalación del sistema de micromedición de volúmenes es realizada por el concesionario con cargo al usuario, salvo que el Concesionario

ejerza su derecho a la colocación de medidores. Una vez instalado el sistema de micromedición, esta forma de determinar los volúmenes a facturar es de carácter irreversible para el inmueble correspondiente.

El Concesionario debe realizar la lectura de los medidores con la periodicidad que requiera la facturación en cada caso. Como caso excepcional (imposibilidad de lectura bajo razón fundada) se permite la estimación de los volúmenes a facturar.

En cuanto a la determinación tarifaria, las prestaciones a inmuebles conectados al servicio son facturadas de acuerdo con la siguiente fórmula genérica:

$$1) MF = (CF + P * Q) * FS * TR$$

Donde: MF: Monto a facturar (\$ por período).

CF: Cargo Fijo (\$ por período) = \$ 4 * K

P: Precio del metro cúbico de agua potable (\$/m³).

Q: Volumen de agua potable a facturar (m³ por período).

FS: Factor de servicio determinado según régimen tarifario.

TR: Factor de tasa retributiva de servicios de regulación y control determinado según régimen tarifario.

K: factor de ajuste tarifario según régimen tarifario.

Se establecieron en el régimen tarifario los precios aplicables a las bandas del volumen Q, cualquiera sea el destino de los inmuebles servidos.

Cuadro 2: Volumen de agua a facturar

Volumen de agua potable bimestral por factura individual emitida (Q)	Precio por metro cúbico P(\$/m ³)
Hasta 20 m ³ / bimestre (Q1)	Pq*0.6*K
Excedente sobre 20 m ³ /bimestre (Q2)	Pq*K

Pq: precio del metro cúbico (\$/m³) de agua ofertado por el Concesionario. Q: Q1 + Q2
K: Factor de ajuste tarifario según el artículo 26.6 del régimen tarifario.

Fuente: Régimen Tarifario

Cuadro 3: Evolución del precio del metro cúbico de agua Pq según PGMDS

A partir del quinto mes del segundo año de Concesión	Pq2 = Pq * 1.04
A partir del quinto mes del tercer año de la Concesión	Pq3 = Pq2 * 1.04
A partir del quinto mes del cuarto año de la Concesión	Pq4 = Pq3 * 1.04
A partir del quinto mes del quinto año de la Concesión	Pq5 = Pq4 * 1.04
A partir del quinto mes del sexto año de la Concesión	Pq6 = Pq5 * 1.04

Fuente: Régimen Tarifario

El volumen de agua potable a facturar (Q) es determinado de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1) A los inmuebles sin medidor instalado se le asigna un volumen de agua potable a facturar fijo denominado “volumen asignado” (QA) por bimestre.

2) Los inmuebles (no baldíos) con conexiones preexistentes (a la toma de posesión) y que se encontraren empadronados en dicho momento, se le determina un volumen asignado (QA) por única vez de acuerdo a la fórmula:

$$2) QA = 12.58 * TBE$$

QA: volumen asignado.

TBE: tasa básica equivalente (m3/bimestre)

La TBE se obtiene en función de la tasa básica mensual zonificada (TBMZ) existente en los padrones de la DIPOS, y que se reproduce en el listado incorporado al Contrato de Concesión como Anexo 10. En ningún caso el valor de TBE puede ser inferior a 1.76.

Cuadro 4: Valores de TBE

Servicio	TBMZ ≤ 5,30	5,30 < TBMZ ≤ 11,50	TBMZ > 11,50
Agua	TBMZ	3,811+TBMZ/3,56	3,006 + TBMZ/2,85
Agua y cloaca	TBMZ/1,50	2,541+TBMZ/5,34	2,008 + TBMZ/4,28
Cloaca	TBMZ/0,50	7,623 + TBMZ/1,78	6,042 + TBMZ/1,43
Agua y cloaca + Pluviocloacal	TBMZ/1,75	2,178 + TBMZ/6,23	1,719 +TBMZ/4,99
Pluviocloacal	TBMZ/0,75	5,082 +TBMZ/2,67	4,016 +TBMZ/2,14

Fuente: Régimen Tarifario

El Factor de Servicio (FS) se establece para cada usuario en particular en función de la disponibilidad de los servicios individuales prestados por el Concesionario, según:

$$3) FS = S1 + S2 + S3 + S4 + S5$$

S1: Abastecimiento de agua potable = 1

S2: Desagüe cloacal = 1

S3: Tratamiento primario de desagües cloacales o asimilables = 0,25

S4: Tratamiento secundario de desagües cloacales o asimilables = 0,25

S5: Desagües pluviocloacales (para sistema mixto pluviocloacal) =0,2

En caso que uno o más de los “i” servicios indicados no estuvieren disponibles, Si= 0. Su aplicación a cada usuario en particular sólo puede ser realizada por el Concesionario una vez que el servicio correspondiente pueda ser prestado efectivamente. Los factores de servicio S3 y S4 no pueden ser aplicados en ningún caso hasta la finalización del segundo año de la Concesión.

A los efectos de solventar el costo de funcionamiento del Ente Regulador, el Concesionario debe facturar a los usuarios la Tasa Retributiva de Servicios Regulatorios y de Control establecida por el artículo 27 de la Ley N°11220, referido al presupuesto en Ente Regulador, discriminando en cada factura la suma o incidencia porcentual informada por el Ente Regulador conforme a su presupuesto anual de funcionamiento (máximo 7% del monto debido por la prestación del servicio).

Los importes facturados durante cada mes calendario por el concepto establecido precedentemente, independientemente de su efectivo cobro, deben ser transferidos al Ente

Regulador. Dichos importes no deben ser pasibles de descuentos, retenciones, embargos ni compensaciones por parte del Concesionario. La mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones descriptas es considerada como falta grave.

El Factor de Ajuste Tarifario es el factor establecido a los fines de determinar variaciones generales a los valores tarifarios y precios contemplados en el régimen tarifario. Al momento de la toma de posesión su valor fue:

$$4) K = 1,00$$

Posteriormente, podría modificarse en función de lo establecido en el capítulo 11 del Contrato de Concesión. Una vez instalada la nueva conexión a un usuario, el Concesionario tiene derecho a la facturación y cobro del cargo de conexión: \$ 280 * K, en el caso de agua potable y \$ 350 * K en el caso de cloacas.

Para el caso de los inmuebles deshabitados respecto de los cuales se hubiera solicitado la desconexión de los servicios disponibles es aplicable el cargo de desconexión: \$ 250 * FS * K.

En inmuebles deshabitados o baldíos respecto de los cuales se hubiere solicitado la no conexión de los servicios disponibles, es aplicable el cargo de no conexión \$ 250 * FS * K (deshabitados) y \$100 * FS * K (baldíos).

Donde el Concesionario efectúe a usuarios la reconexión de servicios, ya fuere por haber estado desconectados o bien por causa del corte de servicio dispuesto por causa justificada previamente a ser efectivizada la reconexión, el Concesionario tiene derecho al cobro del cargo de reconexión: \$ 35 * FS * K.

En los casos que el Concesionario construya por si o por terceros autorizados por él, y una vez que hubiere habilitado una nueva red domiciliaria para la provisión de algunos de los servicios concesionados en un área de expansión, el Concesionario tiene derecho a la facturación y al cobro por inmueble frentista a la obra, del cargo de infraestructura que se establece, según el servicio de que se trate.

Cuadro 5: Cargo de infraestructura (C.I.)

SERVICIO	CARGO DE INFRAESTRUCTURA (1) (\$ Valor Básico)
Abastecimiento de Agua Potable	440 * K
Desagües Cloacales	820 * K

(1) Valor Pago Contado. El financiamiento es de hasta cuarenta y ocho (48) meses.
Fuente: Régimen Tarifario

El Ente Regulador o las autoridades municipales pueden requerir al Concesionario la exención, rebaja o subsidio en el valor del cargo de infraestructura aplicable a grupos particulares de usuarios.

En los casos previstos en el Contrato de Concesión, el Ente Regulador establecerá el valor del Cargo de Infraestructura (CI) aplicable, de acuerdo con el análisis de los costos involucrados que presente el Concesionario, debidamente certificados por los auditores técnico y contable.

Los precios o tarifas indicados en el Régimen Tarifario no incluyen alícuotas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado o tributos de naturaleza municipal que fueren aplicables.

En el aspecto laboral, el Concesionario debe ajustarse a la Ley de Contrato de Trabajo y al convenio colectivo de trabajo del sector. El Concesionario se obligó a tomar todo el personal incluido en el listado del Anexo 11 del PByC que hubiera mantenido su relación laboral con DIPOS hasta el momento de la toma de posesión. Los empleados que hubieren pasado a desempeñarse en el Concesionario conservan la antigüedad y remuneración emergentes de su relación laboral con DIPOS. El Concesionario asume respecto de ellos todas las obligaciones impuestas por la ley y la convención colectiva aplicable, y las que provengan de los términos de la Oferta. Al Concesionario se le permitió implementar un plan de retiro voluntario al que podían acogerse sus empleados.

El servicio que preste el Concesionario está sujeto a la legislación tributaria nacional, provincial, municipal, o comunal vigente en cada momento. Con excepción del impuesto a las ganancias y del IVA, o los que reemplacen a éstos, todos los tributos nacionales o provinciales que pudieran afectar al Concesionario son considerados como costos a los efectos del cálculo tarifario.

La imposición de todo nuevo tributo y la sustitución o variación de los tributos o alícuotas existentes, ocurridos a partir del vencimiento del plazo para la presentación de la Oferta Económico-Financiera, debe ser considerado en relación con su incidencia sobre los valores tarifarios y precios del servicio. En el caso de resultar de aplicación tasas municipales o comunales, su incidencia es contemplada y discriminada exclusivamente en la facturación realizada a los usuarios del municipio que las hubiera establecido.

La extinción de la Concesión ocurrirá por vencimiento del plazo, rescisión por culpa del Concesionario, rescisión por culpa del Concedente, rescisión por caso fortuito, quiebra, concurso preventivo, disolución o liquidación del Concesionario y rescate del servicio.

La rescisión del contrato puede ser adoptada unilateralmente por el Concedente por: incumplimiento grave de disposiciones legales, contractuales o reglamentarias; atrasos reiterados e injustificados en las inversiones anuales o metas convenidas en el PGMDS; renuncia o abandono del servicio imputable al Concesionario; omisión de la toma de posesión del servicio en la fecha establecida en el Contrato; incumplimiento del Programa de Propiedad Participada; incumplimiento en la emisión del bono de participación en las ganancias; locación, venta, cesión, transferencia, constitución de gravámenes o realización de otros actos de disposición respecto de los bienes afectados al servicio, o la falta de aplicación al servicio de los fondos habidos por el Concesionario en virtud de dichos actos; reiterada violación al Reglamento del Usuario; reticencia u ocultamiento reiterado de información al Ente Regulador; modificación de los estatutos del Concesionario sin autorización previa del Concedente; la falta de constitución, renovación o reconstitución de la garantía de cumplimiento del Contrato y de la garantía de las obligaciones del Operador, y del mantenimiento de la vigencia de los seguros solicitados; cualquier incumplimiento del Concesionario, que derivase en el pronunciamiento de una condena firme dictada en su contra por delito de acción pública que redunde en perjuicio del servicio, de la provincia de Santa Fe o del Ente Regulador; concurso preventivo, quiebra, disolución y liquidación del Concesionario; modificación del mecanismo de control del Operador en los aspectos de administración técnica de la Concesión previsto en el pliego, sin autorización previa del Concedente; el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Pliego

para los operadores controlados, controlantes o sujetos a control común, tomados en cuenta para calificar al Operador. En especial, ello comprende la falta de mantenimiento de la situación de control en los casos previstos en el Pliego, sin autorización previa del Concedente.

El Concesionario puede rescindir el Contrato por culpa del Concedente, cuando de una disposición normativa, acto, hecho u omisión del Ente Regulador, del propio Concedente, o de algún otro órgano de la provincia de Santa Fe, resulte un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por el Concedente que cause un grave perjuicio al Concesionario o que impida la razonable continuación de la ejecución del Contrato.

Cualquiera de las partes puede rescindir el Contrato cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, resultare imposible el cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales convenidas. La parte no afectada puede oponerse a la rescisión con fundamento en la probada inexistencia del caso fortuito o fuerza mayor invocada.

Cualquiera de las partes puede ofrecer una renegociación del Contrato en la que se asuman equitativamente las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, la parte que hubiere solicitado la rescisión, puede desechar el ofrecimiento por razones justificadas, manteniendo su voluntad rescisoria.

La presentación del Concesionario en concurso preventivo o la solicitud de su propia quiebra habilita al Concedente a resolver la extinción de la Concesión, con los efectos y alcances de la rescisión por culpa del Concesionario. La declaración de quiebra del Concesionario por sentencia firme causa la extinción de la Concesión, con los efectos y alcances de la rescisión por culpa del Concesionario.

Se extingue la Concesión también cuando el Concedente resuelva el rescate del servicio concedido. Se entiende por tal la declaración unilateral del Concedente, adoptada por fundadas razones de interés público, por la cual se da por finalizada la Concesión y se reasume la prestación del servicio.

La extinción de la Concesión tiene las siguientes consecuencias patrimoniales, según fuere la causa de la misma:

- 1) Extinción sin culpa: el Concedente debe restituir la garantía de cumplimiento del contrato, el valor del stock de insumos que reciba y el valor no amortizado de las inversiones efectuadas y de los bienes afectados al servicio adquiridos o construidos por el Concesionario. No procederá ningún otro reclamo indemnizatorio entre las partes por causa de la extinción.
- 2) Extinción por culpa del Concesionario: éste pierde automáticamente la garantía de cumplimiento del contrato y debe indemnizar todos los daños y perjuicios en exceso del monto de dicha garantía causados al Concedente y al servicio con motivo del incumplimiento. El Concedente restituirá al Concesionario únicamente el valor no amortizado de las inversiones efectuadas y de los bienes afectados al servicio adquiridos o construidos por el Concesionario.
- 3) Extinción por culpa del Concedente: se restituye la garantía de cumplimiento del contrato, el valor no amortizado de las inversiones efectuadas o de los bienes afectados al servicio adquiridos o construidos por el Concesionario y se deberá indemnizar al Concesionario los daños emergentes de la rescisión.

En caso de cualquier controversia relativa a la interpretación y ejecución del contrato, las partes se someten a la jurisdicción local de la provincia de Santa Fe, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder por cualquier causa.

V-Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión

El 29 de abril de 1999 concluyó la renegociación del Contrato de Concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales de la provincia de Santa Fe. Dicha renegociación estuvo fundada en los problemas de cobro de los cargos de infraestructura, que debían abonar los beneficiarios de obras de expansión de acuerdo al PGMDS.

La instancia se había abierto por Decreto 726 del 23 de mayo de 1997, disponiendo la instancia renegociadora con los fines de acordar nuevos valores a los cargos de infraestructura, conexión, desconexión, y no conexión.

Para lograr los fines propuestos se previó la posibilidad de reprogramar obras, diferir inversiones, modificar los parámetros económicos y financieros, otorgar subsidios o implementar otras alternativas conducentes al fin perseguido. Se suspendieron las obras y la facturación de los cargos de infraestructura, conexión, desconexión y no conexión, y de los plazos previstos para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para los años 2 y 3 de la concesión durante el proceso de renegociación. Estas suspensiones no alcanzarían una serie de obras y acciones ni afectarían al resto de las obligaciones y derechos de las partes. Dicho acuerdo fue ratificado por resolución 460/97 del MOSPyVSF.

Las partes desarrollaron un algoritmo que -contemplando reducciones en los montos a pagar por los usuarios y la consecuente caída en los ingresos que por contrato le correspondería facturar al concesionario en concepto de cargo de infraestructura, conexión, desconexión y no conexión, así como los costos provenientes de modificaciones contractuales en las obras por contribución de mejoras transferidas por la provincia, la absorción de los montos a facturar por factores de servicios por tratamiento primario y secundario de desagües cloacales y el adelantamiento de obras relacionadas con el Acueducto del Sur Santafesino-, generara en su reemplazo otros ingresos a percibir en lugar de aquellos. Se tuvieron en cuenta como compensación parcial la reducción en los aportes patronales que según el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 292/95 debían revertirse a favor de los usuarios del servicio.

Lo anterior implicó la reprogramación de todas las obras que generan cargos de infraestructura y de conexión, las que quedaron sujetas a la diagramación propuesta en el mismo. Resultando también necesario reprogramar las restantes metas a cumplimentar por la concesionaria durante el período de concesión y establecer pautas de evaluación de su cumplimiento de acuerdo a las normas y principios que rigen la misma, reprogramando el PGMDS y la matriz de cumplimiento anual. El modelo económico financiero del acuerdo, se basa en un sistema en el que los valores tarifarios aplicados a determinados usuarios equilibran el costo económico de la prestación a otros grupos de usuarios reales (subsidios cruzados), y de compensaciones económicas al concesionario por diferir o no percibir el cobro de las obras de infraestructura o servicios de tratamiento de efluentes.

El Acuerdo consistió puntualmente en lo siguiente:

- 1) Reducir el valor del Cargo de Infraestructura, compensando a APSFSA la diferencia resultante de la manera que se detalla en 9).
- 2) Reducir el valor que corresponde facturar a los usuarios obligados al pago del Cargo de Conexión en área servida, compensando a APSFSA la diferencia resultante de la manera que se detalla en 9).

3) Reducir el valor fijado del Cargo de Desconexión, compensando a APSFSA la diferencia resultante de la manera que se detalla en 9).

4) Reducir el valor fijado del cargo de no conexión, compensando a APSFSA la diferencia resultante de la manera que se detalla en 9).

5) Que APSFSA no cobre a los usuarios obligados al pago, con retroactividad a la fecha de la primera facturación, los importes que surgirían de la facturación de los factores de servicios por tratamiento primario de desagües cloacales o asimilables (S3) y tratamiento secundario de desagües cloacales o asimilables (S4) correspondiente a las ciudades de Reconquista, Rafaela, Esperanza, Gálvez, Cañada de Gómez, Casilda, Firmat y Rufino. Los importes que APSFSA deje de percibir con dicho motivo se compensarán de la manera establecida en 9). En aquellos casos en los que APSFSA hubiere cobrado a usuarios de estas ciudades sumas de dinero derivadas de la facturación de los factores de servicio S3 y S4 arriba mencionados, debió efectuar las devoluciones o compensaciones que fueren menester con intereses resarcitorios.

6) Que APSFSA no cobre a los usuarios obligados los costos provenientes de modificaciones contractuales en las obras que, conforme al Contrato de Concesión, generan obligación de pago de contribución de mejoras, compensándose a APSFSA del modo establecido en 9).

7) Que APSFSA adelante la puesta a disposición de agua con destino al Acueducto del Sur Santafesino, en un punto de la periferia de Rosario, además de ampliar la capacidad de tratamiento de agua superficial a tal efecto para el 1º de Mayo de 2001.

8) Someter a la evaluación de terceros expertos de reconocida capacidad, seleccionados de común acuerdo, el análisis y determinación del impacto económico financiero derivado de la reprogramación de obras, y de la variación de los ingresos y costos generados por la misma.

9) Establecer un sistema de compensaciones de las sumas que el concesionario no facture con motivo de las reducciones que se acuerdan, cuyas modalidades y alcances han sido analizados anteriormente. A tal fin y considerando el principio de equilibrio del costo económico de la prestación a grupos de usuarios a través de valores tarifarios aplicados a otros grupos de usuarios, se ha elaborado un modelo matemático contemplando la compensación al concesionario durante el plazo restante de la Concesión, de los anteriores conceptos.

Como elementos de compensación al concesionario, se contempló la afectación de los montos resultantes de la reducción de aportes patronales previstos en el decreto del PEN 292/95.

El modelo elaborado considerando los valores mencionados, arroja la necesidad de compensar al concesionario con una suma de dinero que representa un porcentaje equivalente al 13,85% aplicable sobre el precio del metro cúbico de agua potable que se hallare vigente, por lo que el precio del metro cúbico de agua aplicable a los servicios que preste el concesionario queda fijado en la suma de \$ 0,3262. En todo lo no modificado expresamente rige lo dispuesto en el contrato de Concesión.

10) La provincia de Santa Fe analizaría y reglamentaría la forma y modo de atender los denominados “casos sociales”.

11) Verificar anualmente los resultados de la compensación económica derivada de la aplicación del sistema convenido en 9) y efectuar las correcciones del caso.

12) Reprogramar las obras a realizar y metas a cumplir como consecuencia del PGMDS, a llevar a cabo desde la vigencia del acuerdo. A los fines de efectuar la evaluación del cumplimiento de dicho plan, se ha elaborado una matriz de cumplimiento anual.

Desde el momento en que el concesionario cumpliera con las metas y compromisos anuales estipulados en la mencionada matriz de cumplimiento anual, será de aplicación la evolución tarifaria establecida en el Contrato de Concesión (Régimen Tarifario), para los años tercero a sexto de la concesión.

El acuerdo detallado anteriormente se aprobó por Ley Provincial N°11.665 y las obligaciones convenidas en esta renegociación fueron cumplidas únicamente en el Año 1 Post Renegociación (PR) que abarcó el período 01/05/99 al 30/04/00 lo que le habilitó el incremento tarifario del 4%. Al transitar el Año 2 PR (mediados del año 2000), APSFSA logró que el Poder Ejecutivo Provincial le concediera una nueva renegociación por Decreto N° 1691/00, suscribiendo el 25/08/00 un acuerdo (Acta I) que dispuso la suspensión de las metas y objetivos.

VI-Nueva renegociación y exposición a shocks macroeconómicos

El 30 de marzo de 2000 la Concesionaria reclamó mediante un documento de trabajo presentado al MOSPyVSF, por una “severa ruptura de la ecuación económica financiera del Contrato”. Dicha ruptura la atribuye a las acciones y omisiones del Regulador y la Concedente. Como propuesta de dicho trabajo se planteó una metodología para la regulación económica del Contrato, consistente en la definición y determinación de la ecuación económica del Contrato, y las pautas para el mantenimiento de la misma en equilibrio, mediante el cambio del esquema regulatorio a uno de tasa de retorno pura.

El 20 de diciembre de 2000 las partes concluyeron un proceso de negociación (abierto por el Decreto 1691/00), arribando a un acuerdo sobre la adopción de una metodología para la regulación económica del contrato para asegurar la viabilidad de la Concesión, que nunca efectivizó el Concedente.

Ley de Emergencia Pública y Reforma del Estado, sancionada y promulgada el 6 de enero de 2002, entre otras, estableció modificaciones al régimen de convertibilidad y aplicó la pesificación de las deudas con el sector financiero. Al respecto, el Concesionario destaca que “las leyes N° 11220 y N° 11665 protegen el principio por el cual se considera que la ecuación económica del contrato se encuentra en equilibrio si las tarifas por los servicios prestados permiten recuperar, en el plazo de la Concesión, todos los costos asociados a la prestación, incluyendo los costos operativos, de inversión e impositivos incurridos por el Concesionario, así como el capital empleado y su remuneración.”

En opinión de la empresa, los efectos negativos del cambio de la paridad de la moneda nacional y el dólar norteamericano, y la incidencia de la modificación de costos por presión inflacionaria desde enero de 2002, ha provocado el no cumplimiento de lo transcrito en el párrafo anterior, sumado a la falta de respuesta de la autoridad Concedente, lo cual ha provocado la ruptura de las bases económicas de la Concesión.

Han resultado afectados el nivel de endeudamiento de la compañía, el Patrimonio neto (pasó a ser negativo), la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones financieras a cargo de la Concesionaria, el Capital Social, los ingresos y los derechos de la Concesionaria que posibilitan los mismos, los costos operativos y de inversiones, el cumplimiento de las obligaciones con el Estado Concedente, la posibilidad de las obligaciones contractuales, la posibilidad de obtención de las garantías contractuales.

Señala también el Concesionario, que a estas afectaciones se le deben sumar las anteriores no resueltas sobre el equilibrio económico de la Concesión y otras posteriores a saber: la incidencia regulatoria del ENRESS sobre los ingresos y la recaudación, la degradación de la recaudación anterior a la emergencia, el incremento de los costos por incidencia de la carga tributaria e incremento de costos financieros.

En opinión del Concesionario el equilibrio de la ecuación económico-financiera del Contrato se hallaba roto, y las consecuencias económicas y financieras de la Ley N° 25561 de Emergencia Pública, empeoraron aquél de forma grave, siendo a su entender responsabilidad de la Concedente recomponer la ecuación quebrada.

APSFSA propuso en dicho documento revisar los objetivos de inversión establecidos, ya que de esta forma se podrían adecuar las metas y objetivos a las posibilidades reales y las tarifas estarían acordes a la capacidad económica de los usuarios.

La empresa efectúa reserva formal de llevar a cabo reclamos y acciones que le correspondan en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley N° 24100 de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con la República Francesa, las leyes provinciales N° 11220 y N° 11665 y los principios generales del derecho administrativo.

El Gobernador de la provincia de Santa Fe creó por Decreto N°0221/02 del 1° de marzo de 2002 una Comisión en el ámbito del MOSPyVSF, a los fines de mantener con la empresa concesionaria las negociaciones necesarias para proponer las modificaciones al Marco Regulatorio de la Concesión y adecuarlo a la realidad económica y social imperante en la provincia y el país. Se estableció que en el proceso de negociación se debería consultar con los municipios que se vean afectados por el servicio.

Por el Decreto N°391/02 el Poder Ejecutivo Provincial no hizo lugar al pedido de habilitación de revisión extraordinaria de valores tarifarios y precios vigentes, efectuado por la empresa concesionaria y declaró no habilitado dicho procedimiento, trasladándole las actuaciones a la Comisión constituida por Decreto N°0221/02.

En un segundo Decreto respectivo al caso (N°0603/02) hizo lugar parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto por la empresa concesionaria y anuló el Decreto N° 391/02 en lo referente al procedimiento administrativo iniciado a petición de la interesada, sin que el MOSPyVSF haya dictado el acto administrativo exigido por las normas reglamentarias contenidas en el PByC de la Concesión. A su vez, ratificó la intervención de la Comisión antes nombrada.

Por último y con fecha 13 de Junio de 2002, se estableció por Decreto N° 1252, un plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos para que la Comisión constituida por Decreto N° 0221/02 eleve el proyecto de modificación del régimen regulatorio y contractual de la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

En la actualidad el programa de inversiones de APSFSA se encuentra suspendido por un proceso de renegociación dispuesto por Decreto N° 1691/00, al que debe sumarse el reiniciado a partir del Decreto N° 221/02, por lo que los compromisos de obras establecidos en el PGMDS o en la Matriz de Cumplimiento Anual han quedado enervados por el acuerdo entre el PEP y APSFSA.

APSFSA ha tramitado el pedido de revisión extraordinaria de tarifas, revisión ordinaria por modificación de costos y la suspensión de las obras y compromisos, pretensiones oportunamente rechazadas por resoluciones del ENRESS. No obstante ello APSFSA en presentaciones efectuadas ante la Comisión Renegociadora ha reiterado su pretensión de incremento tarifario, seguro de cambio, suspensión de inversiones, suspensión del procedimiento sancionatorio y otorgamiento de pautas diferenciales en la prestación del servicio, según fuentes consultadas del ENRESS.

Al día de la fecha las negociaciones se encuentran abiertas.

VII-Reflexiones finales

La Concesión en estudio se suma al conjunto de las llevadas a cabo en el sector de agua y saneamiento en la República Argentina desde el año 1991, pensada para mejorar el servicio en cuanto a calidad, cobertura y uso eficiente del recurso.

Estas medidas fueron instrumentadas propendiendo al desarrollo de la red de agua y cloacas, estableciendo normas de calidad estrictas, creando un Ente Regulador, disminuyendo los cortes del servicio, realizando desvinculaciones laborales ordenadas y cubiertas con indemnizaciones o retiros voluntarios, aumentando la productividad del trabajo, creando un programa de propiedad participada, mejorando luego de la concesión los mecanismos de catastro de clientes y de la operación comercial en general, con el objeto de ganar eficiencia y eficacia en la producción y asignación de los recursos.

A los problemas de orden microeconómico que han llevado a las instancias renegociadoras, se le suma el cambio brusco en el contexto macroeconómico que provocó el ahondamiento de los conflictos.

A modo de cierre, se presentan a continuación algunos temas adicionales de importancia para evaluar la concesión:

Diseño contractual. El contrato suscripto entre la provincia de Santa Fe y APSFSA es un Contrato administrativo -de derecho público- tendiente al cumplimiento de metas y objetivos, cuyas premisas fundamentales son: la mejora en la prestación y la calidad del servicio en las áreas servidas, la micromedición y la expansión del servicio de agua y cloacas a toda la población de los quince distritos que forman la concesión, bajo el principio del riesgo empresario y posee definiciones claras en cuanto a requisitos de calidad del servicio.

Los incentivos en el diseño institucional parecen orientados en la dirección correcta pero aún perfectible. Como ejemplo de ello podemos mencionar: preferencia del personal de la ex-DIPOS en la conformación del Ente, facultándose al PEP a fijar los requerimientos de cantidad y capacitación (Art. 19 Ley N°11220); requerimiento de experiencia e idoneidad de los directores designados por el PEP con acuerdo legislativo y por un período de cuatro años solo removibles por el PEP por justa causa (Art. 22 y 23 Ley N°11220), siendo este ítem y el anterior mejorables mediante el sistema de concurso abierto de antecedentes y oposición; el mecanismo de multas no es considerado un medio de financiamiento del Ente sino que se devuelven a los usuarios mediante rebajas en los montos de precios y tarifas o a través de incrementos en las metas comprometidas en los Planes de Mejoras y Desarrollo, lo que el Ente considere conveniente (Art. 112 inc b Ley N°11220).

Una falencia más complicada del contrato, es no prever revisiones quinquenales ordinarias de metas, con la correspondiente revisión tarifaria. Por otro lado, la azarosa vida del contrato no ha hecho visible esa falencia, por los sucesivos eventos de renegociación a que ha estado sometido durante su vida.

Consulta con los interesados. No se prevé explícitamente en la Ley N° 11220 ningún mecanismo de consulta con los interesados ante eventuales cambios de contexto como pueden ser renegociaciones o aumentos o disminuciones tarifarias mediante el proceso de Audiencias Públicas. En el PByC se establece que: “En aquellos casos en que no se prevea una regla de procedimiento o mecanismo aplicable a una situación en particular, éstas serán establecidas por el Ente Regulador contemplando los principios establecidos en la Ley N°11220 y en el Contrato”.

Independencia de los Entes reguladores. En este sentido, en el caso estudiado se percibe cierto solapamiento de atribuciones y competencias entre el ENRESS y el MOSPyVSF ya que el primero es el organismo de regulación y control de la Concesión pero solo actúa como órgano consultivo obligatorio, pudiendo formular iniciativas, en lo que respecta a planificación y ejecución de inversiones.

Política de personal. En el caso santafesino el artículo 41 de la Ley N°11220 establece el régimen laboral. La información disponible sobre remuneraciones indica que el PEP tiene la facultad de fijar estas o designar a alguien para dicha función en el caso de los Directores (Art. 26 inc. Ley N°11220).

En referencia al personal del Ente que fue tomado de la ex-DIPOS, el artículo 19 de dicha Ley impele a respetar las condiciones laborales escalafonarias y salariales establecidas en los convenios para el sector sanitario, sus beneficios previsionales y sociales. Esta obligación establece una rigidez adicional a la estructura de costos de la empresa y no va en dirección de una política de remuneraciones por productividad, lo cual no significa la eliminación lisa y llana de dichos beneficios. Según el artículo 19 de la misma Ley, el PEP estaba facultado para fijar la cantidad y capacitación del personal del Ente, siendo el Directorio el seleccionador.

Información. Es otro factor crítico en la economía de la regulación ya que la asimetría informativa entre mandante y mandatario (o principal-agente en términos teóricos) que naturalmente existe entre el Ente Regulador y la Empresa Concesionaria debe ser reducida mediante correctos incentivos regulatorios (Requisitos de participación y de compatibilidad de incentivos) que lleven a la empresa a actuar en el sentido deseado por el regulador (Ferro 2001).

La información que debe brindar APSFSA está prevista legal y contractualmente y la misma abarca: El Informe Anual; Informes trimestrales para diversas áreas (usuario, operaciones e infraestructura del servicio, calidad, económico-financiero, etc.) y, finalmente cualquier información de carácter complementario y/o extraordinaria que solicite el Ente Regulador. La información debe presentarse auditada por los auditores externos de la Concesión que son considerados de fundamental importancia en el proceso.

Recursos económicos de los Entes. Es de uso generalizado el sistema de financiamiento de los Entes regulatorios mediante la inclusión en la factura de una tasa de regulación. En el caso tratado aquí, la tasa retributiva de servicios regulatorios está creada por la Ley N°11220 en su Art. 27 cuyo monto fija el PE y que los prestadores facturarán a través del sistema tarifario². Por su parte el Anexo 9 del Contrato de Concesión en su numeral 26.5 establece claramente que los importes facturados por tasa retributiva serán transferidos al ENRESS independientemente de su efectivo cobro, es decir, sobre lo devengado. Esto ya generó problemas en la Concesión santafesina en cuanto en el año 2002 APSFSA dispuso unilateralmente depositar el monto correspondiente al porcentaje de la tasa pero de la facturación percibida, ante lo cual el ENRESS inició acciones judiciales encontrándose este a la espera de sentencia.

Extensión de los servicios a los pobres. Las empresas de servicios públicos privatizadas prestan servicios en una determinada área geográfica donde suelen tener inconvenientes de cobrabilidad en las zonas más pobres los cuales generalmente son tenidos en cuenta a la hora de

² Atento que el servicio en la provincia de Santa Fe comprende el área de la concesión (15 ciudades y APSFSA como único prestador) y el área no concesionada (220 localidades con 254 prestadores entre municipios, comunas y cooperativas), el Poder Ejecutivo ha fijados dos tasas retributivas, a saber: 4,92% para APSFSA y 2,6% para los otros prestadores.

elaborar un plan tarifario por la autoridad concedente y el regulador. En pos de solucionar dicho problema se establecen subsidios cruzados implícitos, tarifas sociales y subsidios explícitos.

También aparece un problema de la misma especie pero diferente al anterior que es el de las expansiones de los servicios a las zonas de bajos recursos por dos razones fundamentalmente: son poco atractivas desde el punto de vista de la tarifa (tarifa catastral) ya que en dichas zonas convergen a los mínimos y por otro lado surge el problema de cómo financiar dichas expansiones. Para corregir el primer punto suele establecerse las zonas hacia donde deben ir las expansiones de una manera explícita, tratando de disminuir la vaguedad y generalidad de las metas. Para el segundo, la práctica común propende al establecimiento de cargos de infraestructura universales y subsidios cruzados.

Con relación al tema, la concesión santafesina posee los siguientes sistemas: a) Subsidio cruzado por precio único del m³ y del servicio en toda la Concesión legalmente establecido. b) Exenciones contractualmente dispuestas a jubilados, escuelas, instituciones deportivas, religiosas, etc. c) Tarifa diferencial para Asentamientos Ediliciamente Precarios y, d) Comisión de Casos Sociales. El problema tarifario y de expansión del servicio a zonas carenciadas es clave para entender los inconvenientes de la Concesión.

Servicios y regulación fuera del área concesionada. En las áreas no concesionadas de la provincia de Santa Fe los servicios son prestados por 117 cooperativas y 75 municipalidades. Según el artículo 20 de la Ley N°11220, el ENRESS debe regular y controlar la prestación del servicio en todo el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe (no solo de la concesión). También es de destacar que la Ley N°11220 en su artículo 37 prevé la incorporación de municipios y comunas mediante un convenio con el Concesionario para proveer el servicio en sus jurisdicciones.

Solución de conflictos entre el prestador y el regulador. La solución de conflictos es un tema de fundamental importancia en los procesos de privatizaciones de empresas de servicios públicos dada la incompletitud natural de los contratos y los grandes cambios en el contexto macroeconómico y legal que se suscitan por lo general en los países en desarrollo donde se están llevando o se llevaron a cabo tales reformas. Los acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones fueron y son una forma de disminuir la incertidumbre de los inversores y promover el desarrollo de la infraestructura en dichos países. La República Argentina posee dichos acuerdos con varios países como por ejemplo con la República de Francia por medio de la Ley N°24100 y otros los cuales garantizan que los conflictos de gran envergadura irán al tribunal internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución autónoma relacionada al Banco Mundial.

En el caso particular de la concesión de Aguas de Santa Fe el artículo 115 de la Ley N° 11220 establece que los conflictos de mayor importancia, los que no tengan que ver con el ejercicio de poder de policía del Ente, podrán ser resueltos por vía de árbitros o amigables componedores, a elección de las partes. Pero también se señala que en caso de cualquier controversia relativa a la interpretación y ejecución del contrato, las partes se someten a la jurisdicción local de la Provincia de Santa Fe, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder por cualquier causa lo cual resulta ambiguo, prestándose a diferentes interpretaciones que pueden llegar a enturbiar el proceso de renegociación.

Dada la devaluación y pesificación de deudas de enero de 2002, se ha generado un conflicto de magnitud entre las partes y se está poniendo a prueba su capacidad negociadora y la eficiencia de los mecanismos de resolución de conflictos descriptos.

En la actualidad, el PEP no ha analizado la presentación judicial como vía para resolver el conflicto. En lo que respecta a APSFSA, la Empresa ha venido sosteniendo en todas sus presentaciones la reserva de derechos de presentarse al CIADI, por lo que el ENRESS ha notificado formalmente al Poder Concedente que se efectúen las debidas diligencias con el Gobierno Nacional ante eventuales presentaciones en fueros internacionales.

Referencias

Acuerdo de Renegociación del contrato de Concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales de la provincia de Santa Fe.

Base Spides, página web del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), www.enohsa.gov.ar.

CEER-UADE para Banco Mundial, Estudio para diseñar una política social para los servicios de infraestructura en Argentina, mimeo, 2002.

Contrato de Concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales de la provincia de Santa Fe.

Decreto N° 1252/02, Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe, 1° de marzo de 2002.

Decreto N° 221/02, Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe, 1° de marzo de 2002.

Decreto N° 391/02, Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe.

Decreto N° 603/02, Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe.

Entrevista al Cr. Santiago Mascheroni (a título personal), ENRESS, 06/11/02.

Expediente N° 163041-0011511-4, caratulado en DIPOS, relacionado con la licitación Pública Nacional e Internacional para el otorgamiento en Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de DIPOS, provincia de Santa Fe.

Ferro, Gustavo (2001), Participación del Sector Privado y regulación en agua y saneamiento en Argentina: casos seleccionados, Texto de discusión N° 30, CEER/IDE-UADE, Buenos Aires, julio.

Gregorini Alberto, Carta al señor Presidente de la Comisión Decreto 221/02, Ing. Edgardo W. Berli, Santa Fe, 6 de agosto de 2002.

Ley Provincial N° 11220, provincia de Santa Fe.

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS).

Presentación de la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. a la Comisión creada por Decreto N° 221/02, julio de 2002.

Serie Textos de Discusión CEER

Para solicitar alguno de estos documentos o suscribirse a toda la Serie Textos de Discusión CEER, vea las instrucciones al final de la lista. Un listado comprehensivo de la Serie textos de Discusión CEER puede hallarse en nuestro web site.

STD 1. Laffont, Jean Jacques: Llevando los principios a la práctica en teoría de la regulación (marzo 1999)

STD 2. Stiglitz, Joseph: The Financial System, Bussiness Cycle and Growth (marzo 1999)

STD 3. Chisari, Omar y Antonio Estache: The Needs of the Poor in Infraestructure Privatization: The Role of Universal Service Obligations. The Case of Argentina (marzo 1999)

STD 4. Estache, Antonio y Martín Rossi: Estimación de una frontera de costos estocástica para empresas del sector agua en Asia y Región del Pacífico (abril 1999)

STD 5. Romero, Carlos : Regulaciones e inversiones en el sector eléctrico (junio 1999)

STD 6. Mateos, Federico: Análisis de la evolución del precio en el Mercado Eléctrico Mayorista de la República Argentina entre 1992 y 1997 (julio 1999).

STD 7. Ferro, Gustavo: Indicadores de eficiencia en agua y saneamiento a partir de costos medios e indicadores de productividad parcial (julio 1999)

STD 8. Balzarotti, Nora: La política de competencia internacional (septiembre 1999)

STD 9. Ferro, Gustavo: La experiencia de Inglaterra y Gales en micromedición de agua potable (septiembre 1999)

STD 10. Balzarotti, Nora: Antitrust en el mercado de gas natural (octubre 1999)

STD 11. Ferro, Gustavo: Evolución del cuadro tarifario de Aguas Argentinas: el financiamiento de las expansiones en Buenos Aires (octubre 1999)

STD 12. Mateos, Federico, Martín Rodríguez Pardina y Martín Rossi: Oferta y demanda de electricidad en la Argentina: un modelo de ecuaciones simultáneas (noviembre 1999)

STD 13. Ferro, Gustavo: Lecciones del Seminario Proyección de Demanda de Consumo de Agua Potable (noviembre 1999)

STD 14: Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Medidas de eficiencia y regulación: una ilustración del sector de distribuidoras de gas en la Argentina (diciembre 1999)

STD 15: Rodríguez Pardina, Martín, Martín Rossi y Christian Ruzzier: Fronteras de eficiencia en el sector de distribución de energía eléctrica: la experiencia sudamericana (diciembre 1999)

STD 16: Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Cambio tecnológico y catching up: el sector de distribución de energía eléctrica en América del Sur (marzo 2000)

STD 17: Ferro, Gustavo: El servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires: privatización y regulación (abril 2000).

STD 18: Celani, Marcelo: Reformas en la industria de las telecomunicaciones en Argentina (junio 2000).

STD 19: Romero, Carlos: La desregulación de la comercialización de electricidad en Inglaterra y Gales (junio 2000).

STD 20: Rossi, Martín: Midiendo el valor social de la calidad de los servicios públicos: el agua.

STD 21: Rodríguez Pardina, Martín: La concesión de Aguas Argentinas. (Noviembre 2000).

STD 22: Rossi, Martín e Iván Canay: Análisis de eficiencia aplicado a la regulación ¿Es importante la Distribución Elegida para el Término de Ineficiencia? (Noviembre 2000)

- STD 23: Ferro, Gustavo: Los instrumentos legales de la renegociación del contrato de Aguas Argentinas (1997-99) (Diciembre 2000).
- STD 24: Briggs, María Cristina y Diego Petrecolla: Problemas de competencia en la asignación de la capacidad de los aeropuertos. El Caso Argentino (Marzo 2001).
- STD 25: Ferro, Gustavo: Riesgo político y riesgo regulatorio: problemas en la concesión de sectores de infraestructura (Marzo 2001).
- STD 26: Ferro, Gustavo: Aguas del Aconquija: revisión de una experiencia fallida de privatización (abril 2001).
- STD 27: Ferro, Gustavo y Marcelo Celani: Servicio universal en telecomunicaciones: concepto y alcance en Argentina (Junio 2001).
- STD 28: Bondorevsky, Diego: Concentración horizontal en el sector de distribución eléctrica en Argentina. (Julio 2001).
- STD 29: Bondorevsky, Diego y Diego Petrecolla: Estructura del mercado de gas natural en Argentina e integración energética regional: Problemas de defensa de la competencia (Julio 2001).
- STD 30: Ferro, Gustavo: Participación del Sector Privado y Regulación en Agua y Saneamiento en Argentina: Casos Seleccionados.
- STD 31: Ferro, Gustavo: Desempeño reseñado de la concesión de agua y saneamiento metropolitana durante 1993-2001.
- STD 32: Bondorevsky Diego y Diego Petrecolla: Concesiones de agua y saneamiento en Argentina: Impacto en los sectores pobres (julio 2001).
- STD 34: Romero, Carlos: Servicio universal en el proceso de privatización de las empresas de telecomunicaciones y agua potable y alcantarillado en el Paraguay (septiembre 2001).
- STD 35-A: Bondorevsky, Diego y Romero Carlos: Fusiones y adquisiciones en el sector eléctrico: Experiencia internacional en el análisis de casos (diciembre 2001)
- STD 35-B: Canay, Iván: Eficiencia y Productividad en Distribuidoras Eléctricas: Repaso de la metodología y aplicación (febrero 2002).
- STD 36: Ullberg, Susann: El Apagón en Buenos Aires 1999 Manejo de crisis en los sectores privados y Públicos en la Argentina (marzo 2002).
- STD 37: Celani Marcelo, Petrecolla Diego, Ruzzier, Christian: Desagregación de Redes en Telecomunicaciones: Una Visión desde la Política de Defensa de la Competencia (abril 2002).
- STD 38: Bondorevsky Diego, Petrecolla Diego, Romero Carlos, Ruzzier Christian: Competencia por Comparación en el Sector de Distribución Eléctrica: El Papel de la Política de Defensa de la Competencia (abril 2002).
- STD 39: Cardozo Javier, Devoto Alberto: La tarifa de distribución antes y después de la Reestructuración del Sector Eléctrico (mayo 2002).
- STD 40: Canay, Iván: Modelando el Gas entregado en Argentina: ¿Cuál es el mejor Predictor? (mayo 2002).
- STD 41: Ruzzier, Christian: Una introducción a la estimación no paramétrica de fronteras de eficiencia (julio 2002).
- STD 42: Rodríguez Pardina, Martín: Mecanismos de Governance del Mercado Eléctrico Argentino: Análisis crítico y comparación internacional (diciembre 2002).
- STD 43: Roitman Mauricio y Ferro Gustavo: La Concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe (marzo 2003).

CEER WORKING PAPER SERIES

To order any of these papers, or all of these, see instructions at the end of the list. A complete list of CEER Working Papers is displayed here and in our web site.

- WPS 1. Laffont, Jean Jacques: Translating Principles Into Practice in Regulation Theory (March 1999)
- WPS 2. Stiglitz, Joseph: Promoting Competition in Telecommunications (March 1999)
- WPS 3. Chisari, Omar, Antonio Estache, y Carlos Romero: Winners and Losers from Utility Privatization in Argentina: Lessons from a General Equilibrium Model (March 1999)
- WPS 4. Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Efficiency Measures and Regulation: An Illustration of the Gas Distribution Sector in Argentina (April 1999)
- WPS 5. Rodríguez Pardina, Martín Rossi and Christian Ruzzier: Consistency Conditions: Efficiency Measures for the Electricity Distribution Sector in South America (June 1999)
- WPS 6. Gordon Mackerron: Current Developments and Problems of Electricity Regulation in the European Union and the United Kingdom (November 1999)
- WPS 7. Martín Rossi: Technical Change and Efficiency Measures: The Post-Privatisation in the Gas Distribution Sector in Argentina (March 2000)
- WPS 8. Omar Chisari, Martín Rodríguez Pardina and Martín Rossi: The Cost of Capital in Regulated Firms: The Argentine Experience (May 2000)
- WPS 9. Omar Chisari, Pedro Dal-Bó and Carlos Romero: High Tension Electricity Network Expansions in Argentina: Decision Mechanisms and Willingness-to-Pay Revelation (May 2000).
- WPS 10. Daniel A. Benitez, Antonio Estache, D. Mark Kennet, And Christian A. Ruzzier. Potential Role of Economic Cost Models in the Regulation of Telecommunications in Developing Countries (August 2000).
- WPS 11. Martín Rodríguez Pardina and Martín Rossi. Technical Change and Catching-up: The Electricity Distribution Sector in South America
- WPS 12. Martín Rossi and Iván Canay. Measuring Inefficiency in Public Utilities: Does the Distribution Matter?
- WPS 13. Quesada, Lucía. Network Competition and Network Regulation (July, 2001).
- WPS 14. Rossi Martín and Christian Ruzzier: Reducing the asymmetry of information through the comparison of the relative efficiency of several regional monopolies (July 2001).
- WPS 15. Ferro, Gustavo: Political Risk and Regulatory Risk: Issues in Emerging Markets Infrastructure Concessions (August, 2001).



Centro de Estudios Económicos de la Regulación

Solicitud de incorporación a la lista de receptores de publicaciones del CEER

Deseo recibir los ejemplares correspondientes a la serie (marque con una cruz la que corresponda), que se publiquen durante 2001:

- a) Working Papers Series (...) impreso (...) e-mail, formato pdf
- b) Serie de Textos de Discusión (...) impreso (...) e-mail, formato pdf

Mi nombre es:.....

Ocupación:.....

Domicilio:.....

.....

.....

Firma

Tenga a bien enviar esta solicitud por correo a:

SECRETARIA CEER

Lima 717, 1° piso

C1073AAO Buenos Aires - Argentina

Por fax, al 54-11-43797588

E-mail: ceer@uade.edu.ar